

Resolución 238/2021, de 2 de diciembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León

Asunto: expediente CT-290/2021 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de León

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 10 de abril de 2021, D. XXX, en calidad de Delegado Sindical en el Ayuntamiento de León, registró a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento una solicitud de información pública. En concreto, con relación a la provisión de vacantes previstas en la Orden General del Cuerpo de la Policía Local de León 05/2021, de 10 de febrero de 2021, se solicitó el acceso telemático a la siguiente documentación:

“1- Relación de aspirantes que concurren a cada proceso de cobertura de vacantes.

2- Relación detallada de los méritos aportados por cada aspirante concurrente a cada proceso de cobertura de vacantes, especificando, denominación del mérito, la duración o nivel del mérito aportado, así como la entidad que lo certifica o expide.

3- Actas de las valoraciones de los méritos aportados por los concurrentes en cada procedimiento, en el que se especifique la valoración efectuada a cada uno de los méritos presentados, conforme a las normas contenidas en la nota informativa de la Jefatura de 17 de mayo de 2010”.

Segundo.- Con fecha 2 de julio de 2021, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la inicial falta de respuesta a la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior.

Del mismo modo, con fechas 6 de julio y 30 de agosto de 2021, tuvieron entrada en la Comisión de Transparencia sendos escritos presentados por D. XXX, poniendo de manifiesto que, a pesar de la respuesta dada por el Ayuntamiento de León a su solicitud de información, este no le había aportado la relacionada con los puntos 2 y 3 del escrito a través del cual formalizó esta.

Tercero.- Recibida la reclamación anterior, esta Comisión de Transparencia se dirigió al Ayuntamiento de León, poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación.

A través del justificante expedido al efecto, consta la recepción de esta petición de información por comparecencia en sede electrónica con fecha 31 de agosto de 2021, y conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se han seguido las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución, lamentando que para ello no haya podido ser conocido el criterio del Ayuntamiento de León, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

Cuarto.- A la vista de la documentación obrante en este expediente, el reclamante había sido informado por el Ayuntamiento de León en el sentido de que D. XXX había sido el único Agente que se había presentado para la provisión de vacantes conforme a la convocatoria de la Orden General del Cuerpo de la Policía Local de León 05/2021, de 10 de febrero de 2021.

En consideración a lo expuesto, dado que D. XXX podría resultar afectado por la resolución de la reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con fecha 27 de octubre de 2021, la Comisión de Transparencia se dirigió a aquel para que pudiera presentar las alegaciones y documentos y justificaciones que tuviera por conveniente en el plazo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación realizada al efecto.

A través del correspondiente acuse de recibo de Correos, consta que fue recibida la comunicación dirigida por la Comisión de Transparencia a D. XXX el día 2 de noviembre de 2021, en la sede de la Policía Local del Ayuntamiento de León, sin que se haya recibido respuesta alguna del interesado en el trámite de alegaciones.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

El artículo 24 de la misma norma dispone que, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.

En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada.

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por D. XXX, quien se encuentra legitimado para ello puesto que es la misma persona que presentó la solicitud de información cuya denegación presunta ha sido impugnada.

Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual:

“La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”.

Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece:

“La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”.

En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 2 de julio de 2021, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 10 de abril de 2021.

En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública por no haber sido resueltas expresamente no se encuentra sujeta a plazo, todo ello conforme a lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como conforme al criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y las previsiones de la LPAC, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición.

Quinto.- Como cuestión previa al análisis de la ausencia de actuación administrativa impugnada, y considerando que quien presentó las solicitudes de información cuya denegación presunta se impugna ha sido un cargo sindical en el Ayuntamiento de León, debemos determinar la aplicación de la LTAIBG y, por tanto, de este mecanismo de reclamación a las peticiones de información formuladas por quienes cumplen ciertas funciones en el marco del ejercicio de la actividad sindical.

En este sentido, se debe partir de lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG, de conformidad con el cual: *“Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”.*

Pues bien, como ya hemos señalado, entre otras, en nuestras resoluciones 91/2017, de 25 de agosto (expte. de reclamación CT-70/2017), 127/2017, de 17 de noviembre (expte. de reclamación CT-31/2017) y 62/2020, de 17 de abril (expte. de reclamación CT-35/2019), al respecto procede exponer que el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/008/2015, de 12 de noviembre, ya expresaba lo siguiente:

“(…) IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico.

En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que



tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso.

La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedarán exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria.

V. Hay que tener en cuenta, finalmente, que la excepción prevista en la LTAIBG no realiza una enumeración taxativa de los procedimientos o áreas de actuación que cuentan con regímenes específicos, para no provocar, por ello, lagunas o introducir rigideces indebidas en el ordenamiento jurídico. Los regímenes mencionados en el apartado tres de su disposición adicional primera -el régimen específico de acceso a la legislación medioambiental, contenido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, y el previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público- lo son a título de ejemplo y admiten la consideración de otros sectores, entre ellos estaría el contenido en los artículos 23 a 32 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el sistema de Archivos de la Administración General del Estado o las disposiciones que, en concreta normativa específica, prevean la reserva en el acceso cuando se den determinados condicionantes (secretos oficiales, secreto estadístico) y algunos otros”.

Esta interpretación fue acogida para un supuesto como el que aquí nos ocupa, donde el solicitante de la información era un representante de los empleados públicos, por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo N.º 4 en su Sentencia núm. 93/2017, de 17 de julio, en la que se señaló respecto a la aplicación de la disposición adicional segunda de la LTAIBG en este ámbito lo siguiente:

“(....) Así, para poder aplicar esta Disposición, el objeto de petición de información debe contar con un régimen específico de acceso a la información que, atendiendo a la naturaleza de la misma, regule el alcance, procedimiento y garantías del mismo. En ningún caso el EBEP puede entenderse como una normativa específica a estos efectos, por mucho que regule detalladamente determinados aspectos procedimentales respecto de la representación sindical y la negociación colectiva en el ámbito de la función pública y vinculada más concretamente al deber de la Administración de proporcionar determinada información a estos efectos (...).

13. *En todo caso, toda posible duda sobre el alcance de este precepto habría de ser solventada mediante la aplicación del principio «pro actione»”.*

Los fundamentos de derecho de esta Sentencia fueron declarados válidos por la Sentencia en apelación, de 5 de febrero de 2018, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En consecuencia, el acceso a la información para los representantes de los empleados públicos regulado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, no constituye un régimen de acceso específico a la información, puesto que en ambas normas lo que se recoge con carácter general es la función de los representantes de los trabajadores de recibir información sobre la política de personal, y no una regulación especial del derecho de acceso a la información pública en el sentido previsto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG. Y, por analogía, lo mismo cabría señalar respecto a quienes representan a los sindicatos a través de las secciones sindicales constituidas. En este mismo sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 748/2020, de 11 de junio.

En definitiva, el hecho de que una solicitud de información sea presentada por representantes de los empleados públicos, o por representantes de los sindicatos como ocurre aquí, no excluye que se ejerza a través de la misma el derecho de acceso a la información pública reconocido a todas las personas en la LTAIBG, ni restringe, por tanto, su objeto a las competencias propias de tales representantes.

Sexto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como *“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*.

En el caso de esta reclamación, la solicitud está relacionada con un proceso para cubrir una vacante de puesto de la Policía Local de León, en virtud de lo previsto en la Orden General 05/2021, proceso llamado a conformar una documentación que ha de reflejar los aspirantes que concurrieron a los mismos, la relación de méritos aportados por cada uno, y la valoración de dichos méritos que debió reflejarse en las actas elaboradas por los órganos de selección conforme a los Criterios de adjudicación de los destinos dentro del Cuerpo de la Policía Local de León determinados por el Intendente Jefe con fecha 17 de mayo de 2010.

Con todo, la información facilitada por el Ayuntamiento de León al reclamante con motivo de la solicitud que ha dado lugar a este expediente de la Comisión de Transparencia se concreta en que D. XXX fue el único Agente que se presentó para cubrir la vacante. Esta información forma parte de la respuesta a la solicitud de información pública dada a través de la Jefatura de la Policía Local en la comunicación de fecha 9 de julio de 2021, la cual ha sido

aportada a esta Comisión de Transparencia por el reclamante; indicándose al mismo tiempo en dicha comunicación que, para la valoración de la antigüedad y los méritos, se siguieron las normas contenidas en la Nota informativa de 17 de mayo de 2010.

Por otro lado, en la comunicación de la Jefatura de la Policía Local se añade que la relación detallada de cada uno de los méritos aportados por los interesados podría ser solicitada por los propios interesados, pero que un sindicato no debe conocer los datos personales sin autorización expresa, debiéndose relacionar esto último con la circunstancia de que D. XXX es un Delgado Sindical en el Ayuntamiento de León.

Centrándonos en el contenido de la información pública solicitada por D. XXX, en lo que respecta al primer punto de su escrito de solicitud de información pública (relación de aspirantes que concurrieron a la convocatoria de vacantes), el ahora reclamante ya ha visto satisfecha su pretensión, puesto que se le ha informado que, en el caso concreto, únicamente se presentó el Agente D. XXX.

En cuanto al segundo punto del escrito de solicitud de información pública (relación detallada de los méritos aportados por los aspirantes que concurrieron a la convocatoria de vacantes), y al tercer punto (actas de valoración de los méritos aportados por los aspirantes concurrentes, especificándose la valoración efectuada de cada uno de los méritos presentados conforme a los Criterios de adjudicación de los destinos dentro del Cuerpo de la Policía Local de León determinados por el Intendente Jefe con fecha 17 de mayo de 2010), no se ha facilitado al reclamante ni los méritos concretos del único candidato presentado, ni la valoración realizada de estos por el Tribunal establecido al efecto.

En cualquier caso, todo lo solicitado por el reclamante es información pública que está a disposición del Ayuntamiento de León como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Al respecto, refiriéndose a la definición que da el artículo 13 de la LTAIBG de información pública, señala el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en la Sentencia 1519/2020, de 12 Noviembre 2020 (Fundamento de Derecho Cuarto), lo siguiente:

“Esta delimitación objetiva del derecho de acceso se extiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurren los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG, por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

Séptimo.- No obstante lo anteriormente expuesto, el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia a cualquier persona. Sin embargo, los posibles límites o causas de inadmisión son los previstos en los artículos 14, 15 y 18 de la LTAIBG.



La información pública que en principio habría de facilitarse a D. XXX, para dar completa satisfacción a su solicitud en los términos que ya hemos concretado, contiene datos de carácter personal, tanto identificativos del aspirante al que se le adjudicó la plaza convocada, como, previsiblemente, otros relativos a la antigüedad en el servicio, a cursos especializados realizados que implican conocimientos de determinadas materias, al conocimiento de idiomas, a la experiencia profesional, etc.; datos que, si fueran disociados conforme a lo establecido en el artículo 15.5 de la LTAIBG, harían que la información a la que se pretende acceder quedara desnaturalizada.

Con todo, nos encontramos con datos de carácter personal que, aunque no estén especialmente protegidos, nos lleva a la aplicación del artículo 19.3 de la LTAIBG, según el cual:

“Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”.

A tal efecto, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 315/2021, de 8 Marzo (Rec. 3193/2019), en su Fundamento de Derecho Cuarto, relativo a la *“Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación”* ha señalado:

“Aunque el trámite de audiencia regulado en los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley de Transparencia aparece referido a dos momentos distintos y ante órganos diferentes, la finalidad perseguida en ambos casos es la misma: que las personas o entidades cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la información pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, puedan formular alegaciones.

Cuando en el procedimiento seguido ante el órgano administrativo no se ha dado trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos suficientes que permitan identificar a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte, puede y debe concederles un trámite de audiencia, con el fin de poder ponderar si el acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses.

El trámite de audiencia ante el Consejo de Transparencia no se condiciona, por tanto, a que los interesados hayan sido oídos previamente en el procedimiento tramitado ante el órgano administrativo destinatario de la solicitud de información.

La intervención del Consejo de Transparencia en fase de reclamación cuando constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia a los afectados puede adoptar las siguientes decisiones:



a) si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe conceder un trámite de audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de fondo que pondere los intereses en conflicto;

b) cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos suficientes que le permitan una fácil identificación, puede ordenar la retroacción de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que cumpla con el trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”.

Considerando lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transparencia ha procedido a conceder el trámite de audiencia a D.XXX, como persona cuyos derechos e intereses pudieran resultar afectados por el acceso a la información solicitada, puesto que con su divulgación se revelarían sus datos personales relacionados con los méritos alegados para presentarse a la provisión de la vacante existente en la Oficina de Denuncias (B-30) de Seguridad Ciudadana. No obstante, en dicho trámite de audiencia, el interesado no ha aprovechado la posibilidad de aportar cualquier tipo de alegación que pudiera tener por conveniente, en particular en cuanto a la oposición que pudiera mostrar a que sus datos personales pudieran ser conocidos con ocasión de la solicitud de información pública presentada por D. XXX.

A partir de lo expuesto, debemos tener en cuenta que el artículo 15 de la LTAIBG establece:

“2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio de los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos científicos o estadísticos; c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos; d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos



en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad”.

El CTBG y la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG, adoptaron con fecha 24 de junio de 2015 un criterio interpretativo de aplicación de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de esta Ley (CI/002/2015). A los efectos que aquí nos interesan, en este criterio interpretativo se afirma lo siguiente:

“El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) comprende las siguientes etapas o fases sucesivas:

I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).

II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (...)

IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG. (...).”.

(Las referencias a la Ley Orgánica 15/2019, de 13 de diciembre, deben entenderse realizadas a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD concluyeron lo siguiente:

“a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso a la información que no operan de forma automática, sino que habrán de ser aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación y los elementos de ponderación que establecen la citada Ley y la LOPD.

b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que modulan la toma de decisiones. (...).”.

En el supuesto aquí planteado, de cara a ponderar el interés público de la divulgación de la información frente a los derechos del único afectado cuyos datos aparezcan en la información solicitada, hay que tener en cuenta que, como ya se ha indicado, el solicitante de la información pública es un delegado sindical al que le corresponden funciones que van más allá de intereses meramente particulares; así como que el motivo esgrimido para solicitar la información pública está relacionado con denuncias recibidas en el sindicato del que es delegado el reclamante sobre posibles irregularidades en la cobertura de vacantes de la Policía Local de León. En sentido contrario, habría que tener en cuenta que los datos personales del afectado a proporcionar no serían únicamente identificativos; así como que, en su caso, podrían afectar a su intimidad y/o seguridad.

En consideración a lo anterior, y dado que D. XXX no ha manifestado ningún tipo de objeción a que el acceso a la información solicitada pueda tener lugar, a pesar de haberlo podido hacer a través del trámite de alegaciones que se le ha facilitado por esta Comisión de Transparencia, lo cierto es que existe un interés público en la divulgación de la información solicitada, relacionado con la regularidad de los procedimientos de asignación de vacantes por vía de concurrencia competitiva; sin que, por otro lado, se evidencie ningún tipo de perjuicio a quien ha obtenido la vacante por el solo hecho de que se conozcan los méritos en virtud de los cuales se le adjudicó la plaza a la que aspiró bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, aunque, en este caso, únicamente hubiera un único candidato presentado.

A partir de lo expuesto, la ponderación realizada debe llevar a estimar la solicitud de información pública presentada por D. XXX sobre el expediente relativo a la provisión de vacante prevista en la Orden General del Cuerpo de la Policía Local de León 05/2021, de 10 de febrero de 2021 y, en particular, sobre el detalle de los méritos aportados por D. XXX y la valoración de estos realizada por el Tribunal para adjudicar la vacante al candidato presentado.

Octavo.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que:

“El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”.

Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que:

“El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”.

En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y



prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que esta expedición pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable.

En el caso que aquí nos ocupa, lo solicitado fue el “*acceso telemático*” a la información interesada, por lo que por esta vía habrá de ser remitida al reclamante la información que corresponde en virtud de esta Resolución.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros,

RESUELVE

Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de León.

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de León debe facilitar a D. XXX la información pública que ha solicitado y, en concreto:

- La relación detallada de los méritos aportados por D. XXX con motivo de la provisión de vacante realizada en virtud de la Orden General del Cuerpo de la Policía Local de León 05/2021, de 10 de febrero de 2021.

- Las actas o documentos en los que pudieran quedar reflejadas las valoraciones de los méritos aportados por D. XXX, y en los que se especifique la valoración efectuada de cada uno de los méritos aportados.

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de León.

Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Esta Resolución es ejecutiva. Frente a la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Tomás Quintana López